

ASENTAMIENTOS HUMANOS

ESPAÑA

Adopción de Decisiones

Programas y Proyectos

- A. Suministro de vivienda adecuada para todos
- B. Mejoramiento de la administración de los asentamientos humanos
- C. Promoción de la planificación y la ordenación sostenible del uso de la tierra
- D. Promoción de la integración de la infraestructura ambiental: agua, saneamiento, avenamiento y manejo de desechos sólidos
- E. Promoción de sistemas sostenibles de energía y transporte en los asentamientos humanos
- F. Promoción de la planificación y gestión de los asentamientos humanos en las regiones propensas a los desastres
- G. Promoción de actividades sostenibles en la industria de la construcción
- H. Promoción del desarrollo de los recursos humanos y el aumento de la capacidad para el adelanto de los asentamientos humanos

Situación General

Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

Información

Investigación y Tecnologías

Financiamiento

Cooperación

Adopción de decisiones: El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales lleva a cabo programas de atención social. También participan otros Ministerios como el Ministerio de Economía con relación a la Ley de Pensiones, el Ministerio de Fomento con relación al *Plan de Vivienda* o el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha ejecutado programas relacionados con la pobreza en el ámbito internacional. Las competencias se encuentran transferidas a las Comunidades Autónomas, realizando asimismo actividades las entidades locales (como el *Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales*), ONGs y otro tipo de asociaciones. Se ha fomentado una mayor participación de las Organizaciones No Gubernamentales como mecanismo de ejecución. Existe una Comisión representativa de las ONGs, integrada por representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 17 ONGs, con el fin de informar en la definición de los programas y prioridades de las convocatorias anuales de ayudas y subvenciones.

La adopción de decisiones se realiza por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (antiguo Ministerio de Industria y Energía), el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Consejerías de Medio Ambiente de cada una de las Comunidades Autónomas (bien a través de programas propios, coordinando iniciativas locales o bien aplicando los programas de la Administración Central). No existe una normativa genérica que promueva el consumo y la producción sostenibles. Pero, sí hay un gran número de disposiciones que regulan aspectos del consumo sostenible, entre otras: Normas para la aplicación del Reglamento CEE relativa a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica, Disposiciones que regulan el etiquetado energético de diversos tipos de electrodomésticos y Certificación Energética de Edificios. Dentro de la legislación española relativa a la Evolución de las modalidades de consumo encontramos, entre muchas otras: la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Las competencias sobre energía descansan sobre la Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio de Economía), aunque el Ministerio de Fomento participa en programas de certificación energética en viviendas y de eficiencia energética en la edificación. El Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de la representación oficial frente a los Organismos Internacionales en materia de Medio Ambiente. La legislación que es discutida y aprobada en Organismos Internacionales y Unión Europea será traspuesta por el Ministerio competente (generalmente en los temas medioambientales hay un reparto de competencias entre los Ministerios de Asuntos Exteriores y Medio Ambiente). Hay otras legislaciones y normativas que en muchos casos son consensuados entre los sectores implicados y representantes de los Ministerios de Economía (competencias en Energía y Medio Ambiente). Por otra parte las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tienen potestad para regular cuestiones medioambientales que pueden completar el carácter de las legislaciones de la Administración Central (según la propia Constitución y los Estatutos de cada Comunidad Autónoma). También los Ayuntamientos pueden establecer Reglamentos en cuanto a niveles de emisión, inmisiones, dentro de sus territorios, y siempre complementando la legislación básica de la Administración Central.

El Ministerio competente en el sistema de transportes en España es el Ministerio de Fomento tanto en la regulación de servicios como en la construcción de infraestructuras. Esta competencia se centra en los servicios e infraestructuras de ámbito estatal, pues dada la estructura fuertemente descentralizada política y administrativamente del Estado Español, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos) tienen importantes competencias sobre los transportes dentro de sus respectivos ámbitos territoriales. Otros ministerios intervienen en el sistema de transportes: el Ministerio del Interior en seguridad vial, el Ministerio de Hacienda en la competencia sobre fiscalidad y el Ministerio de Medio Ambiente en sus competencias medioambientales. Cuando existen cuestiones que afectan a más de un Departamento Ministerial la coordinación la realiza el Consejo de Ministros o alguna de sus Comisiones Delegadas. Para la coordinación con las Comunidades Autónomas existe una Conferencia Sectorial de Transportes en las que están presentes el Ministro de Fomento y los

Responsables Autonómicos en Transportes. Las Autoridades Regionales y Locales tienen atribuidas constitucional y legalmente importantes competencias en transportes dentro de sus respectivos ámbitos territoriales. Los proyectos de infraestructuras de una cierta entidad deben someterse obligatoriamente a un trámite de información pública e institucional; esta información pública comprende también los aspectos medioambientales. De esta manera, cualquier grupo que pueda y quiera influir los proyectos lo puede hacer. El sector privado no participa directamente en los procesos de planificación, pero si lo hace y de forma intensa en la gestión y operación. España cuenta con una larga tradición de explotación de servicios públicos en régimen de concesión. Ejemplos destacados de participación del sector privado en la gestión y operación en régimen de concesión son las autopistas de peaje y los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera.

Las competencias se encuentran repartidas entre el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Comunidades Autónomas (CC.AA.). De acuerdo con el principio de descentralización territorial, en el campo de la sanidad actualmente se han transferido las funciones y servicios sanitarios a las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Valencia, Galicia, Navarra y Canarias, lo que afecta al 61 % de la población.

Las competencias recaen, principalmente, en el Ministerio de Fomento, relacionado con los asuntos de asentamientos humanos, que elabora las normas básicas sobre el régimen del suelo y las normas técnicas sobre la edificación, entre ellas, la legislación básica de obligado cumplimiento y las Normas Técnicas de carácter orientativo; el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que se ocupa de aspectos de integración social de la población desfavorecida, mediante acciones de carácter integral, simultaneando educación, sanidad, vivienda; y el Ministerio de Medio Ambiente, con relación al impacto ambiental, la política del agua y la contaminación. Además, las Comunidades Autónomas tienen competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y ejercen su competencia en la aprobación de los planes urbanísticos municipales formulados por los Ayuntamientos. La actividad de los Ayuntamientos se basa en formular y tramitar el planeamiento general municipal y controlar la protección de la legalidad urbanística. La Constitución Española de 1978 reconoce, en su artículo 47, el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. La actividad del Estado viene regulada en: el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; la Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994, de 24 de noviembre), que pretende fomentar el mercado de alquiler; el Real Decreto 2190/1995, modificado por el Real Decreto 1/1997, de 10 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para el período 1996-1999, y que regula la financiación estatal en estas materias.

Las siguientes instituciones tienen a su cargo el Enfoque Integrado de la Planificación y Ordenación de los Recursos de Tierra: el Ministerio de Medio Ambiente; el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; el Ministerio de Fomento y las Consejerías de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de las Comunidades Autónomas: la ordenación integrada del territorio en España es competencia de las Comunidades Autónomas, pero el Estado se reserva las competencias exclusivas en relación con infraestructuras de fuerte incidencia territorial. Los ayuntamientos también tienen competencias con relación a la ordenación del territorio y los planes urbanísticos. Además existen instituciones y mecanismos de coordinación para la ordenación del territorio como las Comisiones de coordinación de política territorial para coordinar las actuaciones de los diferentes órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas donde están presentes representantes de las diferentes administraciones públicas y órganos sectoriales de los gobiernos regionales. De las 17 Autonomías, 15 tienen una ley de ordenación del territorio: entre los objetivos de estas leyes están el desarrollo sostenible y equilibrado de las comarcas, y la contabilización del desarrollo del sistema productivo y de la urbanización con la protección del medio ambiente. Las leyes autonómicas de ordenación del territorio, en su mayoría, tienen un carácter marcadamente proteccionista de los recursos naturales y del medio ambiente, en las que la

regulación de la explotación de los mismos se basa en el control, restricción y prohibición de usos y actividades; únicamente algunas Comunidades Autónomas (Cataluña, Navarra, Valencia) contemplan en sus leyes de ordenación territorial medidas de fomento para la explotación racional de los recursos naturales. Para la declaración de un espacio natural protegido es preceptiva la formulación de un plan de ordenación de los recursos naturales en el territorio a proteger y zonas adyacentes.

Teniendo en cuenta que las unidades administrativas responsables a escala nacional de la gestión forestal están incluidas en el Ministerio de Medio Ambiente, y que éste realiza toda la labor normativa e institucional horizontal sobre el tema, ya está conseguida la coordinación con la mayor parte de los sectores relacionados con el medio ambiente, y con las actividades industriales, de obras públicas, que inciden sobre él. Sin embargo, la Estrategia Forestal y el *Plan Forestal* crean los órganos de coordinación precisos para que ésta sea aún más perfecta, llevándolos a un nivel administrativo más bajo. Lo mismo se hace con la coordinación entre los niveles central y autonómico, creando los instrumentos de coordinación política, administrativa y técnica precisos y las redes que facilitan la labor de coordinación al disponer de la información precisa. Las Comunidades Autónomas tienen competencias con relación a la ordenación y gestión forestal, la prevención y extinción de incendios, basada en Estrategias y Planes para asegurar la sostenibilidad, tanto en los montes de Utilidad Pública, como en los de titularidad privada. El Consejo Nacional de Bosques, creado en febrero de 2000, por el Consejo de Ministros, está configurado como un órgano de participación plural con funciones de carácter consultivo y asesor en materia técnica y científica, permite garantizar la aplicación de la política de multifuncionalidad en la ordenación forestal.

Las instituciones encargadas en esta temática son la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, y los gobiernos de las 17 Comunidades Autónomas. Las ONGs participan con carácter consultivo en la planificación a todos los niveles. La legislación pertinente es: Convenios de Cooperación para la restauración hidrológico/forestal de cuencas establecidos entre el ICONA y las Comunidades Autónomas; la Ley del Suelo de 1975; la Ley de Montes de 1957; la Ley de Aguas de 1985 y la normativa desarrollada por los Gobiernos Regionales.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas se encargan de la gestión de los *Programas de Desarrollo Sostenible de las zonas montañosas*, con la participación en algunos casos de la Administración Local (Programas *LEADER* y *PRODER*). Las siguientes organizaciones no gubernamentales se ocupan de cuestiones relativas a las zonas de montaña: Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Asociación de Agricultores y Ganaderos (ASAGA) y Confederación de Cooperativas Agrarias de España. La legislación pertinente es la Ley 25/82 de Agricultura de Montaña, además de las siguientes normas jurídicas: los Reales decretos 51/1995, 632/1995 y 928/1995, todos ellos se refieren a las medidas agrarias para la conservación del medio ambiente, el Real Decreto 446/1990, de 6 de abril que regula la indemnización compensatoria de montaña y el Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero sobre forestación de tierras agrícolas.

Las entidades responsables son el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y las Comunidades Autónomas, que como en los casos anteriores, tienen transferidas competencias. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el organismo responsable de la toma de decisiones con relación a la agricultura y el desarrollo rural sostenible y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al que pertenece el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), tiene competencias en investigación agraria. Las Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de gestión y legislación. Además el sector se vértebra a través de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que participan en los cauces establecidos en el proceso de toma de decisiones. Las medidas relacionadas con la agricultura sostenible se ponen en marcha en España a través de normas legislativas internas, que o

bien limitan las actuaciones contaminantes de acuerdo con las normas de la Unión Europea o bien establecen sistemas de ayudas a los agricultores que firman un contrato cuando se trata de medidas de acceso voluntario.

Las principales asociaciones de agricultores son la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). No obstante, existen otras como la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAIE), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA), etc. Estas organizaciones velan por la mejora de la situación del campo y apoya al agricultor y ganadero en el ejercicio de su labor y fomenta que los intereses del campo español se escuchen y se defiendan en todos los foros de decisión agraria, por lo que pretende. También se reivindica la participación del agricultor en el mercado. Esto se realiza mediante el asesoramiento general, la participación en ferias y realización de jornadas (cerealistas, algodóneras, ganaderas, etc.), el asesoramiento jurídico, asesoramiento fiscal, fomento de una agricultura sostenible, etc.

Los agentes principales que participan en la toma de decisiones en el ámbito estatal son el Ministerio de Ciencia y Tecnología (antiguo Ministerio de Industria Energía) y el Ministerio de Medio Ambiente. Promueven políticas en los siguientes sectores: eficiencia de la energía, transporte ecológicamente racional y eficiente, lucha contra la contaminación industrial, vigilancia de la calidad del agua, prácticas racionales de aprovechamiento de la tierra, gestión racional de los recursos marinos, y gestión racional de los desechos tóxicos y otros desechos peligrosos.

En el ámbito nacional, la Dirección General de Turismo de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, del Ministerio de Economía, y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente, son responsables del Turismo Sostenible. En el ámbito local, la responsabilidad recae en las Administraciones de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Cada Comunidad Autónoma tiene su normativa de ordenación territorial propia.

Programas y proyectos:

A. Suministro de vivienda adecuada para todos: La Política de Vivienda se enmarca en el proceso de reformas estructurales, en aplicación del *Programa de Convergencia de la Unión Europea*, dirigidas a alentar la competitividad en el subsector. Los Planes de vivienda fomentan la construcción, la rehabilitación del parque residencial y la urbanización, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a las personas que no pueden hacerlo en las condiciones normales de mercado. Están basados en la cooperación entre los sectores público y privado, y entre los distintos niveles de la Administración Central, Regional y Local. Los objetivos del Plan de Vivienda 2002-2005 son la financiación de viviendas protegidas de nueva construcción, que se destinarán a compra y a alquiler, la financiación de vivienda existentes, la rehabilitación y la urbanización de suelos para viviendas. Los destinatarios de los Planes de vivienda son los segmentos de población con ingresos familiares ponderados anuales inferiores a 5,5 veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), equivalentes a 35.459 € se intensificarán las ayudas a las unidades familiares de menores ingresos creando un tramo especial para aquellos que no superen el 1.5 veces el SMI., las ayudas a la entrada se destinarán a familias con ingresos no superiores a 3.5 veces el SMI., este sistema tiene otra alternativa, que consiste en incrementar notablemente la subsidiación a las cuotas de amortización de los préstamos cualificados, renunciando en ese caso a la ayuda directa a la entrada. Durante este periodo se han llevado a cabo los Planes de Vivienda de 1992-1995 (Total de viviendas financiadas: 594.648), de 1996-1999 (Total de viviendas financiadas: 370.101) , de 1998-2001 (Total de viviendas financiadas: 419.978) y de 2002-2005 (Viviendas financiadas hasta año 2003: 224.715), desarrollados a través de Convenios de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas y que entre sus principales objetivos persigue facilitar el acceso a la vivienda a grupos de población desfavorecidos, potenciar las viviendas en régimen de alquiler como una medida que

posibilite la movilidad laboral, facilitar a los jóvenes el acceso a la primera vivienda y mejorar las ayudas a las familias con hijos. El Plan de Vivienda y Suelo 2002-2005 es el vigente actualmente y pretende destinar durante su primer año de vigencia, un gasto de 540,97 millones de € conforme a los Presupuestos Generales del Estado para el 2002. Con este plan se quiere llevar a cabo 400.000 actuaciones, movilizand o un volumen de préstamos de 17.192 millones de € lo que supondrá un coste estatal en torno a uso 3.380 millones de €. Con relación a la calidad de las viviendas, según la legislación española, todas las promociones de viviendas han de tener, por imperativo legal, los servicios básicos de agua, electricidad y servicios de saneamiento y evacuación de aguas residuales. La tendencia urbanística, a pesar de los esfuerzos planteados por los planes urbanísticos y por la gestión de muchos municipios, tiene consecuencias como la congestión de las áreas centrales, la desatención por el mercado de amplias zonas poco atractivas que pierden actividad económica y habitabilidad (generación de áreas segregadas fuera de los mercados), aumento del consumo de energía y materiales y segregación de los sistemas naturales, con lo que se degradan y pierden complejidad. Para ello se ha realizado la Estrategia Territorial Europea (1997), que considera el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio, aplicándose sus objetivos mediante el *Plan de Desarrollo Regional* (PDR) para el periodo 2000-2006 y se ha promulgado legislación para proteger el entorno, destacando la obligatoriedad de realizar la evaluación de impacto ambiental en determinadas actividades.

B. Mejoramiento de la administración de los asentamientos humanos: La Política de Protección Social tiene un carácter social y económico y se estructura sobre la base de diversas áreas, tales como empleo y protección al desempleo, pensiones, seguridad social, salud, vivienda, etc. todas ellas independientes, pero interrelacionadas entre sí. Las actuaciones destinadas a la lucha contra la pobreza que parten del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, son las siguientes: Promoción, financiación y seguimiento de programas de intervención social integral, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que apliquen los principios de partenariado, multidimensionalidad y participación de la población afectada; apoyo a actuaciones concertadas sobre barrios degradados, buscando la implicación de las ONGs, tejido asociativo local, empresarios y todo tipo de agentes locales; y cooperación financiera y técnica con ONGs, Asociaciones y Fundaciones. Programas que se han llevado a cabo en esta área son: *Plan de Vivienda de 1992-1995, 1996-1999, 1998-2001, 2002-2005* siendo uno de sus principales objetivos el facilitar el acceso a la vivienda a grupos de población desfavorecidos; *Plan de Acción para el Empleo del año 2000* (tercer año de puesta en práctica de la Estrategia Europea de Empleo y en el 2001 se ha aprobado el Cuarto Plan) y el *Programa de Exclusión Social* que tiene como objetivo la integración social de la población desfavorecida. Hay otros planes interrelacionados como el *Plan Integral de la Juventud, Plan Gerontológico, Plan Nacional sobre Drogas, el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes y el Primer Plan Nacional de Accesibilidad*.

En 1998 se firmó un Acuerdo Marco de Cooperación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo de un programa global de turismo sostenible. Entre los objetivos de este programa se encuentran la mejora de la calidad ambiental de los destinos y empresas turísticas, así como la formación y sensibilización de los agentes del sector. Dicho programa quedó plasmado en un *Plan de Turismo Sostenible* que recoge un conjunto de líneas y actuaciones enfocadas a proteger los espacios naturales, incrementar la competitividad del sector turístico español y reducir la estacionalidad de la actual oferta turística. Este Plan está estructurado en cinco grandes programas: *Programas de Destino y Planificación de Infraestructuras; Programa para la mejora de la gestión medio ambiental del sector turístico y de los municipios; Programas de Espacios Naturales Protegidos y Ecoturismo; Programas de Formación y de Sensibilización; Relaciones Internacionales y el Programa de Formación "Turismo y Desarrollo Sostenible"*. Entre los programas llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo caben destacar los Planes de Excelencia y Dinamización Turística, el Proyecto Municipio Verde y los Planes de Formación. En el ámbito autonómico, se han llevado a cabo diferentes iniciativas, entre la que podemos destacar Ecotur. Ecotur es una iniciativa del Gobierno de las Islas Baleares, para la integración del sector turístico y el medio ambiente. Algunas normativas sobre este tema

son el *Plan de Ordenación de la Oferta Turística de Mallorca* y la Ley de Costas. Está estructurado en cuatro programas: 1- Ecotur Instalaciones. 2- Ecotur Destino. 3- Ecotur Promoción. 4- Ecotur Aplicaciones.

C. Promoción de la planificación y la ordenación sostenible del uso de la tierra: Numerosos aspectos tienen relación con la ordenación de los recursos de tierras. En la Estrategia Española de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Española recientemente aprobada, se considera la planificación del territorio y la evaluación de impacto ambiental incorporada al proceso planificador como los dos instrumentos capaces de garantizar la incorporación de los objetivos de sostenibilidad en etapas tempranas de toma de decisiones. El nuevo *Plan Nacional de Residuos Urbanos* aprobado para los años 2000-2006 prevé la incorporación a la normativa de edificación y urbanismo de criterios que contemplen para las nuevas realizaciones espacios adecuados para la recogida selectiva. En la elaboración de los planes autonómicos de ordenación del territorio se contempla la participación pública de manera que una vez que se han elaborado los borradores, tanto de las bases y estrategias primeramente, como del plan de ordenación propiamente dicho hay un plazo de información pública para que sean formuladas las alegaciones pertinentes, que se tendrán en cuenta para la redacción definitiva del plan. Se han formulado y desarrollado indicadores de biodiversidad y de bosques mediante los que se pueden detectar los cambios en el uso del suelo como consecuencia de la pérdida de superficies ocupadas por ecosistemas naturales o espacios agrarios. También la Red de Autoridades ambientales, creada para la integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la realización de acciones a financiar con los Fondos Estructurales de la Comunidad Europea, ha elaborado la metodología básica para la Evaluación Ambiental Estratégica de los *Planes de Desarrollo Regional 2000-2006*. En el ámbito estatal, se han llevado a cabo diferentes iniciativas, entre las que podríamos destacar el *Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales* o ayudas para fomentar el reequilibrio territorial: traslado de actividades industriales de zonas congestionadas a deprimidas, penalizaciones a la creación de actividades industriales o comerciales, establecimiento de programas de inversiones públicas o privadas para la restauración, mejora o conservación del medio natural.

El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado la “Estrategia Forestal Española”, aprobada en marzo de 1999, concebida desde el principio como un documento que refleje un consenso nacional entre todos los actores que tienen relación con los bosques, para lo que se ha seguido un proceso de negociación abierto con todos ellos. Se han elaborado tres borradores, que han sido sometidos a examen por parte de Administraciones, Universidades, entidades de investigación públicas y privadas, colegios profesionales, sindicatos, propietarios privados y públicos, representantes de las industrias de transformación, organizaciones ambientales no gubernamentales, consumidores, profesionales independientes, etc. Además, los ciudadanos españoles han dispuesto del texto en todas sus versiones en Internet (<http://www.mma.es>) y han ejercido su derecho a exponer su opinión sobre el texto. Derivando de anterior documento se ha creado, entre otras cosas, el Consejo Nacional de Bosques (creado en febrero de 2000), se está realizando el tercer Inventario Forestal Nacional, Mapa Forestal, Estadística Forestal y ampliación de supuestos en los que resulta obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental para la mejor protección y conservación de los ecosistemas forestales. Se han constituido las Redes Forestales para asegurar la múltiple funcionalidad de usos, sin menoscabo para la conservación de estos espacios de gran valor ecológico, y actualmente se está desarrollando el *Plan Forestal Nacional*, como desarrollo posterior de la Estrategia Forestal Española, que responde a las características que marcan las Propuestas de Acción del Panel Intergubernamental sobre los Bosques (IPF) para los *Programas Forestales Nacionales*, y cumple con todos sus requisitos. Este *Plan Nacional Forestal*, más específico que el anterior, incluye Acciones forestales del *Programa de Acción Nacional contra la Desertificación*, el *Plan Nacional de Restauración Hidrológico-Forestal* (al que podrían incorporarse las Confederaciones Hidrográficas). Debido al problema de los incendios para un país como España, se ha creado el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), dependiente de la Comisión de Protección de la Naturaleza, que es el que realiza las campañas contra los incendios. Otras actuaciones realizadas con relación a la protección contra los

incendios son dos Libros Rojos: "Coordinación contra los Incendios Forestales" y "Prevención contra los mismos", la realización de estudios sobre los incendios forestales en España durante el decenio 1986-95 (que cada año se complementa con un estudio anual), la creación del CEF (Certificación Española Forestal) como sistema nacional de certificación formado por todas las asociaciones de propietarios e industrias transformadoras de la madera, afiliado al Pan European Forest Certification (PEFC) y el Inventario de Daños Forestales (IDF), 1997.

El gobierno ha adoptado las siguientes medidas para abordar la desertificación: dentro de la Estrategia Forestal Española se están desarrollando los *Planes Ambientales Especiales*, donde figuran dos importantes instrumentos: el *Programa de Acción Nacional contra la Desertización* (PAND) y el *Plan Nacional Forestal*. El *Programa de Acción Nacional contra la Desertización* (PAND) pretende contribuir al logro del desarrollo sostenible de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del territorio nacional y, en particular, la prevención o la reducción de la degradación de las tierras, la rehabilitación de tierras parcialmente degradadas y la recuperación de tierras desertificadas. El borrador del Programa tiene ya un respaldo institucional, al haber sido estudiado por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza en octubre de 1999, habiéndose presentado sus directrices el 17 de junio de 2000. El otro instrumento es el *Plan Nacional Forestal*, más específico que el anterior, incluye Acciones forestales del *Programa de Acción Nacional contra la Desertización*, el *Plan Nacional de Restauración Hidrológico-Forestal* (al que podrían incorporarse las Confederaciones Hidrográficas) y el *Plan de Protección Frente al Cambio Climático*. De estos, el *Plan Nacional de Restauración Hidrológico-Forestal* para el control de la erosión y de la desertificación, tiene como objeto realizar la reconstrucción de la cubierta vegetal en 2 millones de Has. mediante obras de hidrotecnia y de conservación de suelo (la inversión es de 400.000 millones de pesetas a realizar en 20 años). Otros dos programas importantes para prevenir la desertificación son el Programa de Protección de la Cubierta Vegetal (1993) cuyos objetivos son conseguir en cinco años la reforestación de 450.000 Has. de zonas erosionadas, la regeneración de la cubierta vegetal de unas 400.000 Has. y diversas actuaciones de prevención de incendios en otras 250.000 Has (inversión total de 220.000 millones de pesetas). Y el *Plan Integral de Cuenca de Restauración Hidrológico Ambiental*: se prevé realizar obras de restauración y de conservación de riberas en las cuencas hidrográficas (inversión de 85.000 millones de pesetas hasta el año 2001) y se realizan convenios de cooperación del Estado y las Comunidades Autónomas. Se han establecido sistemas nacionales de vigilancia, como estaciones meteorológicas, hidrológicas y de recogida de datos para la evaluación de la degradación de suelos y tierras, y su continua evolución. La lucha contra la desertificación desde la Administración Estatal se ha instrumentado mediante el Proyecto Lucha contra la Desertización en el Mediterráneo (Proyecto LUCDEME), que ha movilizado diversas instituciones de otros países que colaboran con España. Dentro de este proyecto, se puso en marcha en 1996 la Red de Estaciones de Seguimiento y Evaluación de la Erosión y la Desertización (RESEL). Cuenta, de momento, con 41 estaciones experimentales y pretende complementar la información con datos procedentes de otras herramientas (teledetección, inventarios y bases de datos, cartografías temáticas de recursos naturales). La información obtenida es procesada y puesta a disposición de las entidades vinculadas a la planificación y ejecución de acciones contra la desertificación. Con ella se pretende establecer un banco de información con relación al ciclo de erosión, hidrológico y de calidad del agua que pueda ser consultado en tiempo real por cualquier investigador o gestor. Posibilita, además, el diseño de acciones preventivas y de gestión en áreas sensibles a la desertización. Como resultado de los trabajos del LUCDEME se dispone ya de una completa cartografía de Estados Erosivos que sirve para la realización del *Plan Nacional de Restauración Hidrológico-forestal*.

Debido la situación de las zonas de montaña y a la alta erosión de estas áreas, están establecidas unas líneas presupuestarias en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en las Comunidades Autónomas para la financiación de programas, como las Ayudas agroalimentarias o el *Programa de Medidas de Acompañamiento de Medidas Compensatorias*; una gran parte de estas ayudas tiene un retorno de fondos procedentes de la Unión Europea. Para un mejor control de estas áreas, la cobertura se

realiza mediante estaciones de vigilancia meteorológica de la calidad del aire y mediante estaciones de vigilancia hidrológica y de vigilancia física de suelos, bosques, cultivos y recursos biológicos.

Con relación a la mejora de la producción agrícola y los sistemas de cultivo se ha establecido el *Programa Agroambiental* (ayudas para fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección y conservación del espacio natural), el *Programa de Forestación de Tierras Agrarias* (ayudas a inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas rurales), el *Programa de Indemnización compensatoria sobre zonas de especial protección medioambiental*, el *Programa Sectorial de I+D Agrario y Alimentario*, y la Estrategia Nacional para la Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos (bancos de germoplasma de especies cultivadas). La reforestación de tierras empobrecidas y selvicultura de zonas áridas se realiza especialmente a través del Proyecto Estratégico Movilizador de I+D en apoyo de la forestación. Las prioridades se refieren a la reforestación de tierras agrarias marginales abandonadas y a selvicultura de zonas degradadas. En la actualidad se está elaborando un *Programa Nacional de Lucha contra la Erosión*, en el que se incluyen medidas de conservación de suelos agrícolas, restauración de suelos degradados y limitaciones en los cultivos a partir de ciertas pendientes y condiciones meteorológicas. Con relación a la gestión y calidad de las aguas se encuentra en fase de redacción el documento definitivo del *Plan Nacional de Regadíos*, cuyo principal objetivo es el aumento de la eficiencia de la utilización del agua, asignando la mayor parte de la financiación del *Plan a la mejora y modernización de los regadíos existentes*, con actuaciones tales como la mejora en el transporte del agua o el cambio por técnicas de riego más eficientes. Dentro de las Medidas Agroambientales existe una actuación específica de control integrado de plagas, así como una medida que potencia la agricultura ecológica. La agricultura ecológica define un sistema agrario cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de máxima calidad respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra. Actualmente es uno de los sectores agrarios más dinámicos, que se concentra en Extremadura, Andalucía y Castilla-León. Por último, la lucha integrada contra plagas y microdosificación de pesticidas abarca el I+D en materia de lucha integrada contra plagas de diferentes cultivos, y la determinación de las dosificaciones mínimas eficientes de los plaguicidas y métodos de aplicación de mínimo impacto ambiental, así como el desarrollo de inmunoresistencia a las enfermedades.

D. Promoción de la integración de la infraestructura ambiental: agua, saneamiento, avenamiento y gestión de desechos sólidos: Ver en los Perfiles de Agua Potable y Saneamiento

E. Promoción de sistemas sostenible de energía y transporte en los asentamientos humanos: España tiene una gran cantidad de programas relacionados con este capítulo tanto en el ámbito del consumo sostenible, como de la producción sostenible. Dentro del área de consumo sostenible se han puesto en programas de potenciación de las eco-etiquetas (Etiquetado energético de electrodomésticos, Marca "AENOR-Medio Ambiente"), potenciación del transporte sostenible (*Plan Prever*: renovación del parque de automóviles, eliminación del plomo de las gasolinas, Proyecto Europeo "La ciudad sin mi coche"), programas relacionados con la mejora de la eficiencia energética en la edificación (certificación energética de los edificios, Proyecto Reset: sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables en el medio urbano), programas de mejora de la eficiencia energética para usos domésticos (*Programa Domoluz*: lámparas de bajo consumo en el sector doméstico, *Programa ACTANO*: acumulación de calor con tarifa nocturna), programas de sensibilización y difusión de prácticas de consumo sostenible (Campañas de ahorro de energía).

Desde el Gobierno se han puesto en marcha distintos planes y programas como el *Plan Energético Nacional (1991-2000)*, que tiene por objetivos minimizar los costes, favorecer la diversificación, potenciar los recursos autóctonos y contribuir a la protección ambiental. Otros instrumentos más específicos de apoyo, gestionados por el antiguo Ministerio de Industria y Energía (actualmente, en este ámbito, Ministerio de Economía), fueron el *Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE)*, finalizado

en 1999, y el vigente *Plan de Fomento de Energías Renovables*, aprobado en diciembre de 1999 y cuyo horizonte temporal abarca el periodo 2000-2010 (tiene como principal objetivo conseguir que en el año 2010 la contribución de las energías renovables en el consumo de energía primaria alcance el 12%. La tasa de crecimiento anual de dichas energías se ha calculado en torno al 28%).

El Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Energía y el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, han iniciado los trabajos para la transposición de la Directiva 2002/91 de 16 de diciembre de 2002, relativa a la *Eficiencia Energética de los Edificios*. Esta directiva obliga a la aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética en los edificios nuevos y a los edificios existentes que sean objeto de grandes reformas, a la Certificación Energética de Edificios y a la inspección periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado. La transposición de esta directiva está prevista que se realice a través de tres Reales Decretos. El primero con la aprobación del *Código Técnico de la Edificación*, en sus requisitos de ahorro de energía. El segundo con la revisión del *Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios*, para las exigencias de las inspecciones de las instalaciones, y el tercero, con uno específico para la implantación de la *Certificación Energética de Edificios*, tanto para obra nueva como para edificios existentes. El Gobierno promueve políticas y concede incentivos en los siguientes sectores: eficiencia de la energía; desarrollo de tecnologías limpias en programas tales como el *Programa Industrial Tecnológico y Medioambiental* (PITMA); el *Programa PROFIT de Investigación Energética 2000-2003* favorece la innovación y la mejora tecnológica; subvenciones a Estrategia Tecnológica Energética a largo plazo (Programa Estela); y Cofinanzación y Créditos Blandos a través de la Línea Verde del ICO. También existen diferentes programas y subvenciones, como las ayudas y bonificaciones orientadas a facilitar la renovación del parque de determinados aparatos y elementos de consumo (automóviles, equipos de calefacción obsoletos). Asimismo, hay bonificaciones a las compras de equipos más eficientes, subvenciones para el fomento de energías renovables en el sector residencial. Existen otras ayudas destinadas al desarrollo de tecnologías sostenibles, ayudas a instalaciones de energías solar fotovoltaica y térmica, concedidas por el IDEA, Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético. Otras iniciativas destacadas son la Certificación energética de los edificios (Calificación Energética en Viviendas), la divulgación de prácticas de ahorro pasivo de energía en las viviendas, el Proyecto Reset (sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables en el medio urbano), los programas de aplicación de la domótica a las viviendas de protección oficial, el Programa Domoluz (lámparas de bajo consumo en el sector doméstico), el *Programa ACTANO* (acumulación de calor con tarifa nocturna), el *Programa BOMCA Doméstica* (sustitución de calefacción eléctrica directa por bomba de calor), el *Programa FRIDE* (frigoríficos eficientes), etc.

La Administración General del Estado lleva a cabo una política de apoyo al uso del transporte colectivo urbano: financia infraestructuras y subvenciona el precio del transporte pagado por el viajero, a lo que dedica unos recursos anuales en torno a 70.000 millones de pesetas. Además, el Estado tiene a su cargo a través de RENFE el sistema de cercanías ferroviarias de las grandes áreas metropolitanas, también fuertemente subvencionadas. En toda España se han realizado gran cantidad de actuaciones relacionadas con la potenciación de un transporte sostenible: *Plan de Infraestructuras en el periodo 2000/2006*, que pretende una ampliación de la infraestructura del transporte (redes viales, ferrocarriles, etc), Carril Bus-Vao (Vehículos de Alta Ocupación), Plan Prever (renovación del parque de automóviles), *Planes de Movilidad Alternativa* (nuevos modelos de viajes de trabajo), autobuses híbridos, que utilizan energía eléctrica y combustible diesel, eliminación del plomo de las gasolinas, el Programa de difusión sobre el automóvil y el ahorro de energía, Programas I+D de mejora de la eficiencia de los automóviles privados y de transporte público y privado de baja emisión de contaminantes, la implantación de sistemas de transporte urbano y metropolitano del modo ferroviario de media y alta capacidad con sistemas de tracción eléctrica integral, como el metro de Bilbao, El metro de Madrid (mediante ampliaciones y aperturas de líneas), los tranvías urbanos de Bilbao, Barcelona, A Coruña, También al nivel regional y local, en aplicación del *Programa THERMIE 92* de la Unión Europea, se han llevado a cabo programas

dirigidos al desarrollo de tecnología sobre el transporte limpio y al estudio de la viabilidad de los autobuses con gases licuados del petróleo (GLP) o gas natural. Destaca Madrid, Bilbao y, sobre todo, Valladolid, que ha reemplazado sus autobuses diesel por autobuses con GLP. Por su parte, en la ciudad de Murcia se ha establecido un control sistemático de la emisión de contaminantes de los vehículos privados. Anualmente el Estado establece *Planes de Seguridad Vial*, así como campañas publicitarias en esta materia. La Dirección General de Tráfico ofrece información sobre las condiciones de éste en los medios de comunicación, por teléfono, en Internet y con señales electrónicas en autopistas y autovías.

F. Promoción de la planificación y gestión de los asentamientos humanos en las regiones propensas a los desastres: No hay información disponible.

G. Promoción de actividades sostenibles en la industria de la construcción: En el ámbito de la construcción sostenible, se están llevando a cabo varios proyectos desde la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento, como el desarrollo de un programa informático para la calificación energética de las viviendas (CEV), la publicación de una "Guía de edificación sostenible" y se ha elaborado un programa informático para la calificación energética de los edificios (CALENER). También se coordina el "*Programa de Edificación Sostenible 2003-2005*", como consecuencia del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Además, en ese mismo ámbito administrativo, se están desarrollando diversos proyectos: un *Sistema español de evaluación medioambiental de edificios* (EME) y su herramienta informática; *Análisis medioambiental de materiales y Productos de la construcción*, con la creación de una base de datos; el *Libro blanco de la edificación sostenible en España* y la creación del *portal de edificación sostenible "e-sostenible"* en el que se articulen las actividades que se desarrollan en el ámbito nacional.

En 1990, se puso en marcha un programa para la creación de una base industrial, energética y tecnológica medioambiental (PITMA). Uno de los objetivos prioritarios de este Programa era el de ayudar a la industria española a adaptarse a la normativa medioambiental comunitaria. Tras este programa se desarrolló, durante el periodo 1997-1999, la Iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Seguridad y la Calidad Industrial, ATYCA; se trataba de mejorar la competitividad de las empresas a través de su principal objetivo: incentivar y promocionar las inversiones empresariales en investigación y desarrollo, diseño, calidad, seguridad y medio ambiente industrial. La iniciativa ATYCA se articuló en torno a un conjunto de áreas tecnológicas seleccionadas, una de las cuales estaba constituida por las tecnologías para el medio ambiente industrial. Del 2000-2003 está en marcha el *Programa de Fomento de la Investigación Técnica* (PROFIT), que considera el factor medioambiental como uno de los condicionantes de la competitividad. Con relación a planes y estudios para la regularización medioambiental de la industria española se han llevado a cabo una serie de Estudios Básicos Sectoriales para efectuar un diagnóstico de la situación de determinados sectores industriales en cuanto a su grado de adecuación medioambiental. En 1996, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 484/1995 sobre medidas de regularización y control de vertidos, el Ministerio de medio Ambiente desarrolló el *Plan de Programas de Regularización de vertidos*. Ese mismo año se aprobó en el ámbito comunitario la Directiva 96/61/CE sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC). Esta norma supone un importante cambio en las relaciones entre industria y medio ambiente. Constituye un elemento importante para la competitividad de la industria europea debido al ahorro de recursos y a la prevención de la contaminación que se derivará de su aplicación efectiva.

Aparte se realizan acuerdos voluntarios entre la Administración y las industrias: Acuerdo entre el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y las siguientes asociaciones industriales: Federación Española de Curtidores (FECUR), Asociación Española de Fabricantes de Vidrio (ANFEVI), Asociación Española de Pasta y Papel (ASPAPPEL), Agrupación de Fabricantes de Cemento (OFICEMEN), Asociación Española de Fabricantes de Tejas, Ladrillos y Arcilla Cocida (HISPALYT) y

Asociación Española de Empresarios Textiles de la Comunidad Valencia (ATEVAL), para la mejora de la eficiencia energética en sus respectivos sectores de actividad.

H. Promoción del desarrollo de los recursos humanos y el aumento de la capacidad para el adelanto de los asentamientos humanos: Con relación al medio ambiente, la actividad sindical en esta área se acoge a las siguientes líneas básicas: representación de los trabajadores, dentro de la empresa y en las instancias institucionales correspondientes, en los debates sobre temas de relevancia ambiental en el puesto de trabajo, creación de plataformas de defensa ambiental junto con otras organizaciones ciudadanas, participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, establecimiento de colaboraciones permanentes y líneas de trabajo conjuntas con algunas asociaciones ecologistas que han permitido la publicación de materiales y la realización de actividades en común, colaboraciones con la administración en la realización de campañas, seminarios, etc. y colaboraciones con organizaciones empresariales para el desarrollo de actividades sectoriales de protección ambiental. Los sindicatos desarrollan una gran variedad de iniciativas en el campo ambiental como organización y participación en seminarios, congresos, jornadas de medio ambiente y educación ambiental de ámbito autonómico, estatal e internacional, diseño de planes para el desarrollo de energías renovables, elaboración de materiales de educación ambiental en el puesto de trabajo, campañas concretas sobre prevención de incendios, recogida de papel usado, promoción del uso de papel reciclado, etc. Una iniciativa destacable ha sido el programa OPTIMA (Optimización de Procedimientos y Técnicas Industriales para la Mejora Ambiental), impulsado por sindicatos y asociaciones empresariales con la financiación del Fondo Social Europeo. Este programa tiene una línea empresarial y otra sindical, que deben confluir para conseguir el objetivo común de modificar las prácticas productivas. Es una herramienta de aprendizaje para todos los sectores implicados, tanto gestores como sindicatos y asociaciones profesionales.

Situación general: La definición nacional del término de "pobreza" se aplica a las personas que tienen ingresos inferiores al 50% de los ingresos medios por persona en el país. Sobre la base de ese indicador, el nivel de pobreza era el siguiente: en 1980, el 20%; en 1981, el 20,5% y en 1991, el 18,9%. La sociedad española ha profundizado en su desarrollo democrático, ha experimentado un crecimiento económico importante y ha consolidado un modelo de Estado del Bienestar. Como exponente de este impulso puede citarse: fomento de políticas de rentas, pensiones y subsidios por desempleo, la universalización de la educación y de la sanidad, el fortalecimiento y transformación cualitativa de los Servicios Sociales, la promoción de servicios de igualdad de oportunidades para algunos colectivos y de compensación para otros especialmente desfavorecidos y el establecimiento de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.

El *Plan Energético Nacional* en vigor incluye objetivos para aumentar la eficiencia energética, sustitución a gas natural, uso de la cogeneración, y otras formas de energía renovables en todos los sectores económicos. Por lo general, la eficiencia térmica de las viviendas es baja: los datos disponibles muestran que la gran mayoría de las viviendas construidas antes de 1981 presentan un nivel de aislamiento térmico muy deficiente, que mejora en las viviendas de más reciente construcción. Hay que tener en cuenta que los procesos de consumo de energía se multiplican, gracias a la aparición de nuevos usos y aparatos. Esto es especialmente notable en el campo del ocio dentro de los hogares, que emplea una creciente variedad de reproductores de video, cadenas de alta fidelidad, ordenadores personales, etc. A principios de 1995 únicamente se había alcanzado el 9% del ahorro energético previsto para el 2000. En lo relativo a la utilización de energías renovables se ha alcanzado para esas mismas fechas el 22% de lo previsto para el año 2000. Por lo que respecta al consumo de materiales desechables, la eficiencia aumenta si se tiene en cuenta que la tasa de recuperación y reciclaje crece (en torno a un 35% en el vidrio, más de un 40% en el papel y el cartón, mucho más baja en los plásticos).

España es deficitaria en fuentes de energía primaria, por lo que las energías de bajo impacto ambiental tienen una importancia esencial en la política energética del país, suponiendo además un gran potencial

por factores geográficos. Es un importador neto de recursos energéticos (petróleo, gas natural y carbón), pero hay producción de electricidad por carbón autóctono, hidráulica y renovables. En el país ha habido una sustitución importante del carbón (en núcleos donde llega la red) por gas natural y por combustibles líquidos. También ha habido un aumento importante de la contribución de las Energías Renovables (paneles solares). Principalmente el precio suele ser el condicionante que dificulta el uso de fuentes de energías renovables y el uso de técnicas de combustibles menos contaminantes: el Kwh. producido por energías renovables es sensiblemente superior al producido, por ejemplo, en una Central Térmica de carbón convencional. Las principales dificultades encontradas para satisfacer los requisitos financieros en la aplicación de políticas y estrategias energéticas favorables al medio ambiente son las divergencias entre desarrollo económico y estrategias o acciones para mejorar el medio ambiente con coste asociado lo que produce una repercusión en los beneficios.

España participa en las directivas comunitarias y sigue los plazos exigidos en la fabricación de vehículos aptos para el consumo de gasolina sin plomo. En el año 2000 se espera una reducción del consumo de la gasolina con plomo de un 25%. Las mayores ineficiencias, y por lo tanto la necesidad de mejorar el sistema de transporte y reducir el daño a los ecosistemas, se producen por congestión en las infraestructuras viarias en ámbitos urbanos y metropolitanos. Las condiciones orográficas de España dificultan y encarecen las infraestructuras del transporte, principalmente el sistema montañoso de los Pirineos es una barrera geográfica que dificulta el desarrollo de nuevas conexiones viarias entre España y Francia.

La situación española es similar a la de los países desarrollados y diferente a lo establecido en las áreas de trabajo de la Agenda 21, ya que actualmente no cuenta con una tendencia demográfica al alza ni problemas de sobrepoblación, sino que por el contrario, la natalidad es muy baja y no se llega a la tasa de reemplazo necesaria para mantener el mismo número de habitantes. Esta baja natalidad se ve compensada en parte por otra cuestión importante en los países desarrollados: la inmigración, que si bien aumenta la población tiene otras consecuencias que necesitan ser tratadas con políticas adecuadas. España es un país receptor con una baja proporción de población inmigrante en comparación con el resto de los países europeos, aunque se ha producido un aumento destacable en los últimos años.

En España, el problema social de la vivienda viene definido por los siguientes factores: elevado precio de la vivienda en relación con los ingresos familiares, falta de ahorro previo, elevado coste del alquiler y la inexistencia de una oferta suficiente de viviendas sociales en régimen de uso. Por esto, la política está plasmada en cuatro planes estatales de vivienda que fomentan la construcción, la rehabilitación del parque residencial y la urbanización, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a las personas que no pueden hacerlo (concesión de préstamos cualificados, subvenciones a las viviendas protegidas) en las condiciones normales de mercado.

En España se ha pasado en los últimos 21 años de 21 a 31 millones de habitantes en las áreas urbanas. De estas áreas, las aglomeraciones urbanas mayores de 50.000 habitantes han pasado de 18,8 a 25,8 millones de habitantes, lo que supone el 74,4% de la población. No obstante, la densidad de ocupación del territorio es baja (82 hab/km²), si se compara con la media europea de 150 hab/km². La principal causa de este fenómeno es la tendencia urbanística que, a pesar de los esfuerzos planteados por los planes urbanísticos y por la gestión de muchos municipios, tiene consecuencias como la congestión de las áreas centrales, la desatención por el mercado de amplias zonas poco atractivas que pierden actividad económica y habitabilidad, el aumento del consumo de energía y materiales y la segregación de los sistemas naturales, con lo que se degradan y pierden complejidad. El Estado no ha formulado una estrategia o política nacional sobre la ordenación integrada del suelo. No obstante, la mayoría de las Comunidades Autónomas han desarrollado o están desarrollando sus directrices de ordenación del territorio según lo previsto en sus respectivas legislaciones.

En España, la superficie forestal ocupa el 51,4% de la superficie total del país, de la que el 66% es de propiedad privada, mientras que el 29% es de propiedad municipal, y sólo el 5% restante corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas. En el sector forestal español se está llevando a cabo una profunda reforma del marco jurídico e institucional forestal, tanto para conseguir su adaptación a la nueva realidad política e institucional de nuestro país, como para cumplir con los compromisos internacionales de los que España es signataria, como son las Conferencias Ministeriales sobre Protección de Bosques en Europa. Este proceso ha comenzado con la elaboración del documento Estrategia Forestal Española, que ha logrado aglutinar el consenso de todas las partes interesadas y se ha elaborado con total transparencia y participación. De él deben derivarse la nueva Ley Básica de Montes y Aprovechamientos Forestales, cuyo borrador está en proceso de elaboración, el *Plan Nacional Forestal*, ya presentado para discusión pública, y los cambios administrativos e institucionales que ambos instrumentos exijan.

En España, el 44% del territorio está afectado por la desertificación debido a la erosión, que es el agente causante de este fenómeno en el país. Esa cifra supone en conjunto 22.000.000 de has. de las cuales el proceso es grave o muy grave en 9.000.000 de has. (18% de la superficie total) y en 13.000.000 de has. (26%) sería de moderada a importante. Igualmente se puede considerar que una superficie de aproximadamente 1.000.000 de has. reúne condiciones de desierto. Las zonas que sufren en mayor grado el problema de la desertificación son las regiones mediterráneas de la península, principalmente el Sudeste, en las Comunidades Autónomas de Murcia y de Andalucía, siendo las provincias más afectadas: Murcia, Granada y Almería con el desierto de Tabernes; y la depresión del Ebro en Aragón, con las zonas de los Monegros y las Bárdenas Reales. Además de causas naturales, los efectos del cultivo incorrecto y del uso indebido de la tierra son las causas más graves de la desertificación.

Las zonas de montaña son los territorios de mayor valor ecológico, donde existen más especies naturales protegidas y un mayor nivel de diversidad biológica. La situación de estas áreas ha variado en los últimos años, produciéndose en algunos casos un deterioro significativo, como se puede observar en los siguientes datos: la erosión grave afecta más de 9 millones de has. del suelo en las zonas de montañas en donde más de 30 millones de has. la erosión es importante. Los daños forestales se agravaron significativamente entre 1990 y 1994. En 1990, el 78% del bosque era clasificado sin ningún daño, en 1994 era solamente el 38%. Al mismo tiempo, el bosque con daños importantes aumentó del 3% al 13%, y los daños graves aumentaron de 0% al 2%. El bosque con daños insignificantes aumentó del 17% al 42%. El despoblamiento y envejecimiento de la población rural son los dos rasgos socioeconómicos más característicos de las zonas de montaña españolas, junto con la escasez y equipamiento de infraestructuras.

El desarrollo rural constituye uno de los pilares de la política agraria española. Aunque no se haya definido una política nacional sobre agricultura sostenible, se puede decir que, a partir del año 1993, se ha iniciado una estrategia sobre desarrollo rural, cuyo objetivo básico es lograr un desarrollo sostenible.

Esto surge como consecuencia de la preocupación ambiental que se convierte en un aspecto clave en la agricultura a partir de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y de la Cumbre de Río en 1992. En este marco, hay que hacer referencia a tres normas de gran relevancia en la puesta en marcha de la nueva política: el *Reglamento (CEE) 2078/92*, sobre medidas agroambientales, el *Reglamento (CEE) 2079/92*, para la jubilación anticipada, y el *Reglamento (CEE) 2080/92*, sobre forestación de tierras agrarias. Tanto la Administración General como las Comunidades Autónomas tienen programas de desarrollo rural, en el marco de los programas de la Unión Europea. En el período 1994-1999 cabe destacar las medidas de mejora de las infraestructuras, la modernización de las explotaciones agrarias, teniendo en cuenta el carácter multifuncional de la agricultura y la diversificación de las actividades, la mejora de la comercialización y la transformación de productos agrarios, el rejuvenecimiento del sector y el fomento de las actividades asociativas. En el marco de la nueva PAC, se ha intensificado la estrategia para el desarrollo de una agricultura sostenible, así como el incremento de la superficie de bosques con

especies autóctonas, utilizando tierras agrícolas de vocación forestal. Sólo existen limitaciones para los espacios protegidos (Parques Nacionales, Parques Naturales, reservas integradas, etc.), así como en las Zonas de Especial Conservación de Aves (Directiva 79/409/CEE) y Hábitat (Directiva 92/43/CEE).

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: Se han llevado a cabo acciones encaminadas a universalizar la educación como medida para evitar la exclusión social. En España la educación es obligatoria y gratuita y alcanza prácticamente a la totalidad de la población infantil en el tramo de edades comprendido entre los 6 y los 16 años. Además existen programas complementarios de formación para el empleo, educación de adultos y programas de garantía social.

Las medidas adoptadas para sensibilizar al público respecto a cuestiones relacionadas con la energía y el medio ambiente han tomado la forma de diversas campañas del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) al nivel nacional. Por ejemplo, la "Guía de la Energía" para ahorro en casa y el coche y campañas para buenas pautas en la conducción. Los principales programas o medidas que se han adoptado para educar al consumidor en cuestiones relacionadas con la energía y el medio ambiente también han tenido la forma de diversas campañas de información de las propias compañías suministradoras sobre medidas para mejor utilización y más eficiente de los electrodomésticos.

Las principales actividades para sensibilizar al público respecto al efecto del transporte en el medio ambiente son: Promoción de energías alternativas, promoción de uso racional de vehículos turísticos por los ciudadanos y promoción de planes de transporte alternativo. Entre las medidas adoptadas para alentar una mejor utilización del transporte público, el transporte colectivo en automóvil, el transporte no motorizado, etc., se debe mencionar que existen calzadas para vehículos de alta ocupación y muchos ayuntamientos tienen en marcha programas de fomento del transporte no motorizado. Para poder educar al público en materia de seguridad de tráfico se realizan campañas periódicas publicitarias en materias de seguridad vial por la Dirección General de Tráfico.

Se han llevado a cabo diferentes programas para fomentar el consumo sostenible dentro de los asentamientos humanos como campañas de ahorro de energía (dentro de la vivienda), campaña de recogida selectiva de pilas de botón, campaña sobre recogida selectiva de aceites usados de motor, *Plan de Ahorro de Energía* basado en el reciclaje de envases de vidrio, publicaciones y exposiciones sobre el consumo sostenible, etc.

Una medida que realiza todos los años el Ministerio de Medio Ambiente para contribuir a la concienciación social sobre incendios son las Campañas Escolares para la Prevención de Incendios Forestales, organizadas al comienzo de cada curso escolar. En la Campaña del curso 2000-2001 participan más de 150.000 escolares. Se han realizado programas Educativos de Recuperación de Pueblos Abandonados en el monte y realización de cursos sobre Interpretación y Educación Ambiental para profesores, especialistas y técnicos.

Las actuaciones directas de las oficinas comarcales de las Comunidades Autónomas están siendo fundamentales para concienciar no sólo a los agricultores sino al resto de la población rural de la conveniencia de preservar los recursos naturales, como medio de supervivencia y prosperidad. Con relación a la formación de investigadores se realizan "Cursos de formación de formadores en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)": se han realizado 12 cursos internacionales cada año. Asimismo, con objeto de concienciar al sector agrario se desarrollan cursos de monitores agroambientales que tienen un gran efecto multiplicador por la capacidad de difusión a los agricultores, a través de los programas agroambientales y de los cursos específicos realizados por las organizaciones y cooperativas agrarias. Con ello se pretende fomentar la agricultura extensiva, la formación agroambiental, las razas en peligro de extinción y la agricultura ecológica o biológica.

Información: La recopilación de información relativa a la energía y cuestiones relacionadas con la energía y los métodos utilizados generalmente se realiza por medio de encuestas a los sectores energéticos, estadísticas de las Comunidades Autónomas y comunicaciones con las empresas del sector. Toda esta información se pone a la disposición de los usuarios por medio de Publicaciones del Ministerio de Economía y por medio de su sitio de Internet (<http://www.mineco.es>). Asimismo se puede encontrar información en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía: <http://www.idae.es>, en el Ministerio de Medio Ambiente <http://www.mma.es> y en el Ministerio de Fomento <http://www.mfom.es>.

Desde hace varios años existe un sistema de recopilación de datos informativos relativos a los distintos flujos de tráfico en los transportes. Las principales carencias de información se concentran en el transporte por carretera, donde falta información sobre el origen y destino de los flujos, aunque exista una información detallada sobre los tráficos que circulan por las infraestructuras. En algunas grandes áreas metropolitanas las autoridades regionales realizan de forma sistemática encuestas domiciliarias sobre movilidad. La información sobre las condiciones de tráfico y el estado de las carreteras la ofrece la Dirección General de Tráfico en los medios de comunicación y por teléfono, así como señales electrónicas en autopistas y autovías, y en Internet (<http://www.dgt.es>). También se puede encontrar información sobre aspectos del transporte en las páginas de Internet del Ministerio de Fomento (<http://www.mfom.es>) y en el Ministerio de Medio Ambiente (<http://www.mma.es>).

La información sobre el desarrollo de los *Planes de Vivienda* que se han realizado se puede encontrar en <http://www.mfom.es>. Asimismo existe información sobre el ordenamiento ambiental en <http://www.mma.es>.

Para mejorar los sistemas de evaluación para la tierra y los recursos de tierras, los planes de ordenación del territorio incluyen una descripción de: (i) el territorio y sus recursos: medio biótico, medio inerte, paisaje, recursos científico-culturales, usos y aprovechamientos del suelo, inventario de edificaciones, utilidades, equipamiento y todo tipo de dotaciones, degradaciones y amenazas, afecciones normativas del suelo; (ii) el entorno socioeconómico y territorial; (iii) la capacidad de acogida del medio físico. Toda la información anterior se encuentra a disposición de los ciudadanos que la soliciten. Los ayuntamientos de municipios de cierta entidad editan memorias de medio ambiente que recopilan toda la información medioambiental del término municipal. Estas memorias son para uso público y se difunden ampliamente, no sólo entre los vecinos del municipio. También se puede obtener información en las Comunidades Autónomas, bien en las Consejerías de Medio Ambiente o en las de Obras Públicas, y en los Ayuntamientos. Además, se puede encontrar información en la dirección del Ministerio de Medio Ambiente: <http://www.mma.es> y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. <http://www.mapya.es>.

Se está desarrollando un Plan nacional para la creación de un sistema de indicadores de la sostenibilidad de los bosques en España el cual se lleva a cabo en coordinación con la Comunidad Europea. Este plan será también el que proporcionará la información necesaria. El Ministerio de Medio Ambiente tiene información en su página web sobre los distintos programas y acciones que se llevan a cabo: <http://www.mma.es>.

Investigación y tecnologías: Acerca a la lucha contra la pobreza, especialmente en las acciones emprendidas en el exterior, la investigación tiene un papel primordial, como el *Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo* (CYTED), Proyectos de Innovación IBEROEKA o el Centro Iberoamericano para el Desarrollo Estratégico urbano, entre otros programas.

En el Consejo de Ministros de 1999 fue aprobado el *Plan de Fomento de Energías Renovables 2000-2010*; existe un gran potencial crecimiento según se describe en el *Plan de Fomento*, siempre dependiendo de la ejecución de las inversiones previstas. Entre las nuevas tecnologías en el país para

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación derivada de la producción, existe en España una Central de Gasificación de Ciclo Combinado de 330 MW actualmente en funcionamiento y que ha sido un proyecto parcialmente financiado por las ayudas del *Programa Thermie* y en el que participan las principales empresas eléctricas nacionales y varias de fuera de España.

Para promover el uso de fuentes alternativas de energía para el transporte, existen los planes denominados *Plan de fomento de las energías renovables en España 2000-2010* y *Plan PROFIT*, entre otros. En el sector naviero existen planes de innovación tecnológica que tienden a lograr una mayor economía de costos. Con el fin de tener un sistema de transporte menos contaminante y más seguro, el Gobierno de España se ha ocupado a fondo de las tecnologías del transporte y de la seguridad; y en parte a la eficacia relativa en relación con el costo de otros sistemas, a la creación de sistemas de tránsito para las masas y a los impactos sobre el medio ambiente. En comparación a otros países de la región el sistema de transporte es considerado igual: eficacia relativa en relación con el costo de otros sistemas, tecnologías del transporte, impactos sobre el medio ambiente, seguridad.

Existen numerosos proyectos de I+D orientados a la aplicación de la domótica a las viviendas, aplicaciones de la electricidad fotovoltaica a la edificación, y programas relacionados con la mejora de la eficiencia energética en la edificación, como la certificación energética de los edificios (Calificación Energética en Viviendas), la divulgación de prácticas de ahorro pasivo de energía en las viviendas y el Proyecto Reset (sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables en el medio urbano), entre otros.

Financiación: El apoyo económico a las ONGs es regulado a través de las convocatorias de subvenciones del Régimen General y a través de la distribución de los recursos destinados por los ciudadanos a "otros fines de interés social" en la asignación tributaria del 0,52% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El *Plan de Vivienda 2002-2005* que actualmente se está desarrollando, se propone destinar más de 202.713.474.95 € a ayudas estatales de acceso a la vivienda (AEDE), subvenciones y subsidiaciones. Además en la actualidad el tratamiento fiscal de la vivienda también se basa en una variada imposición y en incentivos fiscales en el Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF) destinados a favorecer el acceso a la vivienda.

Las ayudas directas del gobierno cumplen un importante papel dentro de programas como el PAEE (*Plan de Ahorro y Eficiencia Energética*) que van orientadas a la adquisición de equipos eficientes desde el punto de vista energético y a la promoción de las energías renovables. Este sector también recibe financiamiento de Fondos de la Unión Europea (programas *SAVE*, *LIFE*). Existen subvenciones para promocionar la producción sostenible, incluidas en los siguientes programas de ámbito nacional: *Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental* (PITMA), Iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Seguridad y la Calidad Industrial (ATYCA), *Programa de Fomento de la Investigación Técnica* (PROFIT). Asimismo existen ayudas y bonificaciones orientadas a facilitar la renovación del parque de determinados aparatos y elementos de consumo (automóviles, equipos de calefacción obsoletos), bonificaciones a la compra de equipos más eficientes, subvenciones para el fomento de energías renovables en el sector residencial, etc. El gobierno también ha establecido un novedoso instrumento en España consistente en la aplicación de desgravaciones fiscales para determinadas inversiones protectoras del medio ambiente.

Aunque no hay información acerca de los fondos, y su procedencia, que se usan para la energía sostenible y renovable, la construcción desde principios de los años 90 de una infraestructura para el transporte y distribución de gas natural que atraviesa el Estrecho de Gibraltar con un trazado básicamente sur-norte de Europa con las del gas argelino y que también atraviesa Portugal ha sido uno de los pilares de la nueva distribución de energía.

Existen experiencias recientes en la construcción de infraestructura de carreteras donde el 90% del presupuesto es Estatal y el 10% corresponde al sector privado que participa en la construcción de autopistas de peaje, infraestructuras ferroviarias de ámbito urbano realizadas en colaboración entre el sector público y el sector privado. Se potencia la flexibilización de la legislación para fomentar la inversión privada en infraestructuras.

El *Plan de Vivienda 1992-1995* se desarrolló con un grado de cumplimiento superior al de los objetivos previstos: los objetivos iniciales en número de viviendas eran de 494.109 y las viviendas que se financiaron fueron 594.648. El *Programa de Vivienda para el período 1996-1999*, tenía el objetivo de 329.763 viviendas y se financiaron 370.101. El *Programa de Vivienda para el período 1998-2001*, no superó los objetivos previstos, se pretendía inicialmente la financiación de 498.945 viviendas y se realizaron 419.978. El Grado de ejecución del Plan vigente, Plan 2002-2005, desde su inicio el objetivo inicial era de 353.878 viviendas y hasta el momento, años 2002-2003, se han financiado 224.715 viviendas.

En materia de instrumentos de apoyo financiero, dentro de la Estrategia Forestal Española, se decidió fomentar la gestión forestal sostenible por una doble vía: por medio de las subvenciones a la capitalización del monte, condicionando las subvenciones que tradicionalmente se dan al propietario privado para actuaciones en sus montes a la existencia de un plan técnico de gestión o instrumento equivalente, aprobado por la Administración forestal competente. Y por la vía fiscal, adecuando la fiscalidad a las características de nuestros montes, primando a los que tuviesen un plan técnico de gestión o instrumento equivalente aprobado, y eliminando las subvenciones de los ingresos susceptibles de imposición.

El *Plan Nacional de Restauración Hidrológico-Forestal* para el control de la erosión y de la desertificación tiene una inversión de 400.000 millones de pesetas a realizar en 20 años. El *Programa de Protección de la Cubierta Vegetal* (1993) prevé una inversión total de 220.000 millones de pesetas. El *Plan Integral de Cuenca de Restauración Hidrológico Ambiental* tiene una inversión de 85.000 millones de pesetas hasta el año 2001.

En materia de ayudas, tras la reforma de la PAC en 1992, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural (antiguo IRYDA) y del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA), ha venido transfiriendo a las Comunidades Autónomas, durante la programación 1994-1999, fondos comunitarios del FEOGA-Garantía, completados con la cofinanciación de fondos estatales en el caso de programas horizontales o plurirregionales, para la concesión de ayudas relacionadas con los aspectos agroforestales y agroambientales. Los instrumentos a través de los que se articularon todos estos fondos fueron el *Programa de Forestación de Tierras Agrarias* y el *Programa Agroambiental*. Las medidas contempladas en la Agenda 2000 constituyen la base de la Unión Europea de cara a las futuras negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la OMC. Las medidas se financian con la contribución de las Administraciones públicas de la Unión Europea, del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Cooperación: Al nivel internacional se realizan actividades destinadas a la lucha contra la pobreza en otros países mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para impulsar el desarrollo económico y social en otras zonas mediante la puesta en marcha de programas. Entre los programas que se llevan a cabo podemos destacar el Programa ARAUCARIA, *Programas de Desarrollo Rural Integral para potenciar el sector primario*, *Programa de Preservación del Patrimonio Cultural*, *Programa de Becas Mutis*, *Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)*, *programas dirigidos a la educación, la formación y la sanidad*, el *Plan Eurasia* y el *Programa AZAHAR*, entre otros.

Desde la Agencia Española de Cooperación Internacional, existen programas destinados a fomentar el desarrollo de tareas de investigación (realizando proyectos en estas áreas), como el *Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo* (CYTED), el *programa de Cooperación Científica con Ibero América MEC-MAE*, entre otros. Aparte destaca la colaboración de esta entidad para la planificación energética y el uso racional de la energía, especialmente en el área de África, Asia y Europa Central.

La transferencia de tecnología realizada por España en el área de la energía representa un 14% del total de la transferencia tecnológica, con 68 proyectos realizados en el período 1995-1999. Participan en estos proyectos el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), empresas de equipamiento para energía solar fotovoltaica y energía eólica, ONGs, y Universidades. Se trata de proyectos de electrificación rural mediante energías renovables, mejora de la eficiencia energética y del impacto ambiental en procesos industriales de producción, asesoramiento técnico y asistencia institucional, transferencia de tecnología para potenciar el uso de energías renovables, y capacitación de personal técnico. La financiación procede de las Administraciones Públicas (Agencia Española de Cooperación Internacional, Comunidades Autónomas, IDAE) y de Programas nacionales, autonómicos o de la Unión Europea.

España es país miembro de la Unión Europea por lo que participa activamente en los planes que tienden a armonizar al sector del transporte. También, por su especial sensibilidad con la problemática del sector transporte en Iberoamérica, coopera en los planes que se establecen en las Cumbres Iberoamericanas y en los Encuentros de Ministros de Iberoamérica de Obras Públicas y Transportes. Al nivel Regional y Subregional España participa en la cuenca del Mediterráneo, tanto en el Foro Euro mediterráneo de Transportes como en el Grupo de Ministros de Transportes del Mediterráneo Occidental (GTMO) y al nivel bilateral, establece planes con los países de su entorno que coordinan el desarrollo del sector. España también participa activamente en los más importantes foros internacionales donde se establecen las actuales políticas del sector y forma parte de los diversos acuerdos y convenios que estos foros elaboran: Naciones Unidas; Comisión Económica para Europa (CEPE/ONU); Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); Conferencia Europea de Ministros de Transporte (CEMT); Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); Organización Europea para la Seguridad Aérea (EUROCONTROL); Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC); Organización Intergubernamental para los Transportes Ferroviarios Internacionales (OTIF); Organización Marítima Internacional (OMI); Unión Postal Universal (UPU).

En el ámbito de la cooperación internacional, la política está dirigida principalmente a los países iberoamericanos, ofreciendo colaboración en la formación de técnicos, intercambio de experiencias y asesoramiento técnico. Se han realizado programas de medidas para la mejora de la situación urbanística de zonas deprimidas localizadas en barrios periféricos de grandes urbes sudamericanas. Al nivel europeo se ha realizado la Estrategia Territorial Europea (1997) para el periodo 2000-2006 (descrita anteriormente).

Para contrarrestar la actual tendencia urbanística, los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea han acordado modelos y objetivos para el desarrollo futuro del territorio comunitario. Se recogen en la "Estrategia Territorial Europea (ETE) – Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE" (1999). La ETE promueve una estructura equilibrada del territorio mediante el desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades y una nueva relación campo-ciudad, la garantía de acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento, y el desarrollo sostenible. En España se aplica a través del *Plan de Desarrollo Regional para el periodo 2000-2006*, referido a las regiones objetivo 1. Aparte con la Iniciativa Interreg II, la Unión Europea pretende una experimentación y futura generalización de la puesta en práctica de estrategias territoriales comunes. Se incluye el refuerzo de los sistemas urbanos mediante la cooperación transnacional entre Estados y regiones en programas

comunes. Además, la UE fomenta la cooperación transfronteriza y entre ciudades, reforzando fórmulas de complementariedad y establecimiento de redes. Se favorecen así modelos más equilibrados de ciudad.

España coopera con la Comunidad Europea en los diferentes aspectos relacionados a la sostenibilidad de los bosques y participa en los siguientes foros: Foro Forestal de las Naciones Unidas (UNFF), Comisión Forestal Europea de la FAO, Proceso Ministerial Paneuropeo Forestal, Comité de la Madera (UNECE), Comité Forestal Permanente y Grupo Forestal del Consejo de la Unión Europea y Observatorio Europeo de Bosques de Montaña (OEBM). Se han realizado proyectos como Fortalecimiento a la Planificación de sistemas de Parques Nacionales de Panamá, Curso Superior Iberoamericano sobre protección de incendios forestales y Cursos superiores para países mediterráneos sobre protección de incendios forestales.

Para localizar y tratar los problemas de la erosión se han estudiado las cuencas más afectadas con el Proyecto LUCDEME (Lucha contra la Desertificación en el Mediterráneo). El Proyecto LUCDEME tiene tres líneas de actividad: conocimiento de los recursos y factores implicados en los procesos de desertificación, conocimiento y puesta a punto de las técnicas para su control, y formación del personal en la temática del proyecto. El proyecto LUCDEME ha movilizado diversas instituciones de otros países que colaboran con España. España firmó en 1994 y ratificó en 1996, la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África. La Red de Estaciones de Seguimiento y Evaluación de la Erosión y la Desertificación (RESEL) forma parte de la Red Euro mediterránea de seguimiento y evaluación de la erosión y la desertificación, enmarcada en una iniciativa de cooperación Euro mediterránea cofinanciada por el programa MEDA de la Unión Europea. Además el *Programa de Acción Nacional contra la Desertización* (PAND) se articula participa plenamente en el Grupo de Expertos en desertificación del Consejo de la Unión Europea.

Entre los instrumentos de la política española de cooperación internacional figuran la ayuda humanitaria, que incluye la ayuda alimentaria de emergencia para proteger vidas humanas y aliviar la situación de las poblaciones víctimas de catástrofes naturales o causadas por el hombre o que padecen una situación de conflicto bélico. También se llevan a cabo otras líneas de actuación como Cursos de formación de formadores en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI): se han realizado 12 cursos internacionales cada año. A través del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria de España (INIA) se participa en muchas de las redes cooperativas europeas o interregionales de investigación en agricultura de la FAO. Además, España participa en el proyecto "Investigación Cooperativa sobre Gestión de los recursos biológicos de la OCDE" y el "Programa cooperativo europeo de recursos genéticos de los cultivos". El INIA mantiene relaciones bilaterales con diversas organizaciones e instituciones internacionales; por ejemplo, tiene acuerdos de cooperación científica y técnica con el Instituto Nacional de Investigación Agrónoma de Francia, con la Academia Rusa de Ciencias Agrarias, con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina y el Instituto Nacional de Investigación Agraria de Uruguay.

* * *